

Narrativa

Escenario D. "Peor que antes: fuimos para atrás"

Resumen

En 2040 la economía muestra signos de debilitamiento. El país no se ha recuperado de los impactos del COVID-19 y otros desastres naturales sucedidos entre el 2020 y 2039. Sigue la baja inversión en educación, ciencia y tecnología, y la investigación es incapaz de producir resultados que impacten sobre el desarrollo productivo y el tejido social. La gestión ambiental continúa con serias deficiencias y el ritmo de crecimiento económico no permite mejorar las condiciones de pobreza y exclusión. Al mismo tiempo la violencia en todas sus formas ha aumentado. Existe desigualdad territorial marcada. El ambiente político institucional se ha deteriorado. Se retrocede en la cultura de rendición de cuentas y aumenta dramáticamente el número de denuncias por corrupción.

En 2040 la economía muestra serios signos de debilitamiento. El crecimiento del PIB ha estado apenas entre 1% y 3% en promedio. El país ha sido incapaz de recuperar la contracción de la economía de -4.0% del PIB ocasionada por el COVID-19, hace veinte años, y por otros desastres naturales que han afectado seriamente las capacidades económicas construidas.

El deterioro socio-económico continúa en un espiral de declive, acompañado de un ascenso en la deuda externa y una disminución de remesas.

Las tradicionales fuentes de ingreso están seriamente afectadas por diferentes fenómenos, algunos de origen interno y otros de origen externo. El país es incapaz de enfrentar los fenómenos globalizadores, como es el comercio internacional. Hay una reducida inversión extranjera, y las tasas de informalidad laboral y desempleo son mucho más altas que en el pasado, ocasionando mayor emigración y violencia. El bajo crecimiento económico no ha logrado fortalecer el desarrollo económico ni generar nuevos empleos.

En el sector agropecuario, empeora la situación, no se visibiliza su importancia, se deja su crecimiento prácticamente al azar, y no como resultado de una política y estrategia, menos aún se consideran las tecnologías disruptivas que hubieran podido mejorar la producción y la calidad.

Las exportaciones de este sector, que en 2020 eran de importancia se han reducido, principalmente por la presencia en sus mercados tradicionales de exportadores más eficientes que han asimilado y desarrollado nuevas tecnologías.

En 2040 el país ha perdido la oportunidad que se presentó con el bono demográfico, y la población hondureña ingresa en la fase de envejecimiento creciente, con carga creciente sobre la fuerza de trabajo activa.

Los niveles de inequidad en la distribución del ingreso se acentúan y los niveles de acceso a satisfactores de necesidades básicas se reducen fuertemente. La pobreza del país es grande con un porcentaje altísimo de pobres extremos, del orden de 35%. La clase media languidece y los conflictos sociales aumentan. La esperanza de vida al nacer se estanca, alrededor de los 65 años, y la mortalidad materna infantil empeora. En este marco, la violencia aumenta por diferentes motivos, la presencia del crimen organizado (maras, pandillas, narcotráfico), la delincuencia común y de género.

La crisis sanitaria de 2020 puso en evidencia la fragilidad del sistema de salud, incluyendo dificultades de acceso, que hasta ahora continúan en el mismo estado, altos niveles de endeudamiento y la evidencia clara de corrupción en el uso de los fondos públicos. Los próximos años estaremos pagando o usando los recursos públicos del Estado para cancelar estas deudas y no para destinarlas a inversión en salud o educación.

El bajo crecimiento económico incide directamente en el gasto público en educación, sector que recibe solamente un 2% del PIB menor que en el 2020 que fue de 5.9%. La reducción en el gasto público para educación afecta la cobertura y calidad de la educación pública. La baja inversión en salud es también evidente.

Este bajo nivel educativo ha hecho que el capital humano en Honduras carezca de las capacidades y competencias necesarias para adaptar e implementar, como han hecho otros países de la región, soluciones científico-tecnológicas innovadoras adaptadas a sus necesidades. Más aún, el bajo nivel educativo ha dado lugar a mayor corrupción y bajas capacidades técnicas.

La gestión ambiental continúa como en el pasado con serias deficiencias y el bajo ritmo de crecimiento económico no permite mejorar las condiciones de pobreza y exclusión. A partir del 2022 los impactos negativos del cambio climático aumentaron la presión sobre los recursos naturales, y los fenómenos naturales, como consecuencia del cambio climático, comenzaron a ser más extremos y frecuentes. Estos fenómenos encuentran al país totalmente desprovisto de capacidades para mitigarlos. Esta falta de capacidad se deriva en gran parte de la ausencia de investigación sobre este fenómeno.

Honduras ha firmado y es parte de una iniciativa de acceso a fondos para la mitigación de los efectos del cambio climático a los cuales debería acceder siendo un país vulnerable. Sin embargo, trabas burocráticas y deficiencias institucionales continúan afectando el desarrollo de programas de mitigación y uso de los fondos de manera eficiente. También se advierte ineficiencia técnica de las instituciones ejecutoras.

En Honduras, un país cuya economía tradicionalmente se ha basado en la industria agrícola y la explotación de sus recursos naturales, con baja inversión en I+D+i, los efectos negativos son mayores, experimentándose a nivel nacional una escasez de recursos hídricos, deterioro en la calidad de los suelos, aumento en la tasa de deforestación, entre otros factores.

El territorio nacional ahora cuenta con solo un 30% de cobertura boscosa, donde se hospeda el 11% del remanente de la biodiversidad en el país. El efecto del cambio climático (altas temperaturas, temporadas lluviosas más extensas, y otros) ha desbastado las áreas de cultivo. Las medidas adoptadas para responder o mitigar este fenómeno han sido absolutamente insuficientes. Otras deficiencias institucionales (en los permisos y licencias ambientales) afectan también la regulación eficiente en el uso de los recursos naturales.

Por la ausencia de mayores inversiones en tecnología e infraestructura, el país ha retrocedido en la utilización de fuentes nuevas y renovables de energía, que ya en 2020 habían alcanzado el 60% de la generación. Al no modificar la matriz energética se ha provocado una atmósfera insalubre y mortalmente peligrosa para la población, y la flora y biodiversidad que se pierden progresivamente.

Las costas caribeñas de Honduras contienen parte de la barrera de arrecifes más larga del hemisferio. Como un esfuerzo conjunto entre los cuatro países que conforman el Arrecife Mesoamericano se estableció el Índice de Salud Arrecifal (ISA). Ya para 2020 los datos del índice no eran alentadores. El ISA disminuyó por primera vez en 12 años, de 2.8 en 2016 a 2.5 en 2018 (de “Regular” a “Malo”, 3.0 a 2.5). Para 2040 este índice ha disminuido por debajo de 1.5.

Los desequilibrios en la distribución territorial de la población se acentúan con agudización de la sobre urbanización en zona metropolitanas, y aumenta de la migración campo ciudad y el hacinamiento en las zonas urbanas.

El ambiente político institucional se deteriora gravemente. El sistema político se debilita, perdiendo la población confianza en las instituciones democráticas. Se retrocede en la cultura de rendición de cuentas y aumenta dramáticamente el número de denuncias por corrupción. El proceso de descentralización política administrativa se empantana y se vuelve a esquemas de centralismo exacerbado, cercano a una dictadura.

Existen diversas causas que contribuyen a la situación actual. La reducida inversión en la educación en todos sus niveles, así como en la ciencia y la tecnología ha hecho que la investigación sea incapaz de producir resultados que puedan balancear las dificultades de carácter económico y tampoco pueden producir suficiente conocimiento para impactar sobre el tejido social.

La tasa de matriculación terciaria es menor del 20%, debido a la baja inversión pública y la pobre formación que reciben los estudiantes del nivel medio de educación; las universidades en general no logran captar una cantidad significativa de estudiantes que cumplan con los perfiles de ingreso establecidos. La falta de estudios de mercados de manera sistemática impone dificultades a las universidades para actualizar la oferta académica. Las universidades siguen graduando un bajo porcentaje de profesionales en áreas de ingeniería y técnicos. La fuga de cerebros es mayor, y existe en general un

desanimó de los jóvenes en perseguir carreras de esta naturaleza.

El gasto efectuado en actividades científicas y tecnológicas continúa peor que en el pasado, apenas representan el 0.1% del PIB y es menor para la investigación. El número de personas que se dedican a actividades de investigación e innovación no alcanza a una masa crítica necesaria para producir mejores resultados en la investigación. Los presupuestos institucionales destinados a una fortalecida gobernanza del Sistema Nacional de CTI son muy bajos. Las empresas no realizan inversión para la absorción y transferencias de las últimas tecnologías; y no existe una real inversión extranjera en empresas hondureñas de base tecnológica.

La baja inversión, tanto pública como privada se refleja en el bajo desarrollo que hace con que la economía digital de Honduras esté lejos de los países líderes, por ejemplo, en la banda ancha móvil, como Corea, o la banda ancha fija como Singapur o Chile en la región latinoamericana. Además de la inversión es también urgente mejoras en el marco normativo. Las limitaciones existentes impiden acceder a un abanico más amplio de cuestiones relacionadas con la confianza, como por ejemplo en las áreas de protección del consumidor, protección de la privacidad y gestión de riesgos de seguridad digital. Más aun no están facilitando el acceso a otras tecnologías de carácter disruptivo en plena evolución.

A pesar de que ya en 2040, el país comprendió que la inclusión digital es un elemento crucial para enfrentar las desigualdades socioeconómicas, donde los servicios de acceso a Internet son considerados esenciales para garantizar el bienestar de los ciudadanos, la política pública, que está preocupada con cuestiones vinculadas a la pobreza y la desigualdad, sigue en extremo limitada para guiar el desarrollo de esta crucial área del conocimiento y la tecnología.

En 2040, el acceso a Internet sigue siendo privilegio de las grandes urbes y grupos académicos y económicos fuertes. Todavía sólo un 40% de la población tiene acceso a Internet de calidad.

El desarrollo de la infraestructura digital, en particular la banda ancha, no está facilitando mejores competencias en TIC, empleo, salud en línea (e-health), gobierno digital, protección del consumidor, privacidad y seguridad. Tampoco está contribuyendo que los gobiernos sean más transparentes, eficaces y reactivos.